

Democratizando el Poder Judicial



Rafael Simancas
Subdirector de TEMAS

El Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales han emprendido un proceso decidido, valiente y de largo alcance, con el objetivo de reformar el Poder Judicial conforme a los mejores estándares de transparencia, eficacia y calidad democrática.

Tras la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por la derecha durante más de cinco años, se han tramitado tres reformas legislativas de gran relevancia, que en su conjunto constituyen la mayor transformación modernizadora y democratizadora del Poder Judicial desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Y que se suman a las reformas ya emprendidas desde inicios de 2024 para impulsar la digitalización en el funcionamiento de juzgados y tribunales.

Más eficiencia y más igualdad de oportunidades

La Ley 1/2025 de mejora de la eficiencia en el servicio público de Justicia ya está en el BOE y aplicándose. Además de modernizar y reorganizar la estructura de la administración de Justicia y la renovación de toda la planta judicial, esta ley instaura los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia municipales, la regulación de los jueces sustitutos, la especialización de los juzgados de infancia, familia y violencia de género, así

como la apuesta por los medios alternativos de resolución de conflictos.

Otra gran iniciativa es el Proyecto de Ley para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que adecúa la impartición de Justicia a la nueva realidad social, garantizando la igualdad de oportunidades y la excelencia en el acceso a tales responsabilidades públicas. Se consolidan por ley las becas SERÉ, con cuantía equiparable al salario mínimo y duración de cuatro años. Se asigna al Centro de Estudios Jurídicos la condición de centro de preparación de oposiciones, estableciendo la compatibilidad preceptiva y el registro público obligado para jueces preparadores.

Se refuerza el cuarto turno de acceso a la carrera judicial, reservado a juristas de reconocida competencia durante más de diez años de ejercicio, incluyendo un mecanismo de estabilización para los jueces sustitutos en activo. Y se añaden nuevas garantías de pluralidad e integridad para el Poder Judicial, con una nueva regulación para su Comisión de Ética y para los procesos de elección de las salas de gobierno de los principales tribunales.

Contra las acciones judiciales abusivas

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha registrado una proposición de ley "de garantía

El Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales han emprendido un proceso decidido, valiente y de largo alcance, con el objetivo de reformar el Poder Judicial conforme a los mejores estándares de transparencia, eficacia y calidad democrática.

y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas" que, a juicio de la reacción airada de sectores ultras en la política, las redes y la judicatura, tiene un fundamento muy acertado.

Uno de los factores que alimentan la polarización y la crispación política intensa que vivimos proviene de la estrategia de esos mismos sectores ultraderechistas para hacer uso de acciones judiciales de forma claramente abusiva.

La estrategia consiste en fabricar bulos con acusaciones falsas contra políticos, periodistas o activistas sociales y culturales de ideas progresistas o sus familias, con efectos perversos sobre la actividad y la fama de sus víctimas, que después multiplican activando un acoso judicial irregular y abusivo.

El penúltimo caso ha afectado a una presentadora de la televisión pública, que durante la emisión de las campanadas de fin de año mostró una ilustración con motivo religioso. El ataque ulterior por parte de la fachosfera fue tan brutal como injusto, en redes, en medios de comunicación, y también en la judicatura.

Los derechos y libertades vulnerados mediante tal conducta son múltiples: el derecho a la libertad de expresión y creación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros.

El propósito de esta estrategia ultra es doble. Por una parte, se trata de destruir o cuando menos amenazar a los adversarios políticos, mediáticos y sociales. Por otro lado, buscan ocultar los indudables éxitos de gestión del Gobierno progresista, que bate récords de crecimiento económico, creación de empleo y beneficios sociales para la mayoría de la población. Inventan escándalos inexistentes en los demás para disimular los escándalos auténticos que les son propios, en la Comunidad de Madrid sin ir más lejos.

Desmintiendo bulos

Esta estrategia del bulo y las acciones judiciales abusivas deteriora la calidad de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Y hay que defenderse. Nos va mucho en ello. Nuestros derechos y nuestras libertades están amenazados por la ultraderecha, una vez más en la historia.

Las reformas legales planteadas en la proposición del Grupo Socialista se resumen en tres. Primero se acota la figura de la acción popular, que la

fachosfera manipula para multiplicar los efectos de sus bulos contra adversarios progresistas. La herramienta constitucional se mantiene, pero se impide su uso por parte de partidos políticos y asociaciones relacionadas, se exige vínculo concreto con el interés público en litigio, y se imposibilita abrir procesos penales mediante meros recortes de prensa sin indicios de irregularidad.

En segundo lugar, se suprime del Código Penal el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, porque nuestra sociedad es lo suficientemente madura para encajar las opiniones contrarias a dogmas y ceremonias sin sufrir daños dramáticos.

Y, en tercer lugar, se regula la abstención y recusación de jueces por declaraciones o actividades de carácter político. Porque es de pura lógica que cuando un juez o magistrado realice públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o en relación a sus iniciativas, no se le permita participar después en un proceso en el que tales instancias formen parte. Están en juego los derechos de los afectados y la debida imagen de imparcialidad del poder judicial.

Esta es la realidad del contenido de la propuesta. Los bulos al respecto han sido muchos, como cabía esperar.

Se ha dicho que es inconstitucional limitar el uso de la acción popular y es falso, porque el artículo 125 de la Constitución atribuye su regulación a lo "que la ley determine".

Se ha dicho que la propuesta busca la impunidad de algunos imputados en procesos actualmente en vigor relacionados con la familia del Presidente del Gobierno y es falso, porque cuando la ley se publique en el BOE tales procesos habrán concluido mucho tiempo atrás, habiéndose probado la honestidad de sus víctimas y la intención espuria de sus impulsores.

Se ha dicho que se despenaliza el acoso a las personas religiosas y es falso, porque el Código Penal mantendrá los tipos que castigan cualquier ataque por motivos religiosos. Si se ataca la reputación de una persona por su religión, está el delito de injurias. Si se alienta la violencia o la discriminación, está el delito de odio.

Hay que acabar con la estrategia ultra de acosar a personas honorables con bulos y con acciones judiciales abusivas, y la propuesta socialista es un buen paso hacia esa meta. **TEMAS**